

CAPERUCITA Y LOS CDCHT

Jaime Requena

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas, Venezuela
requena.j@gmail.com

Desde el año 2007, es decir desde hace algo más de un período presidencial de aquellos quinquenales o el de nuevo cuño, ha sido una política explícita de quienes nos gobiernan, acosar a las grandes universidades públicas aferradas al credo de la autonomía. Desde esa época las universidades reciben el mismo presupuesto, sin corrección monetaria por inflación y mucho menos –ni pensarlo– con algún tipo de aumento para adopción de nuevos programas o resolución de algún problema grave. Ellas son un blanco continuo de las críticas gubernamentales, expuestas ante la nación como entes ineficientes y desconectados de las realidades de su entorno. Todo, porque el gobierno desea doblegarlas para que renuncien de hecho a su condición de autónomas utilizando para ello como arma mortal un estoque financiero.

El cuadro de agobio hacia nuestras grandes casas de estudios superiores lo completa el corifeo de ‘mujiqitas’¹ prestos a ganarse la aprobación de sus superiores, funcionarios gubernamentales buenos solos para hacerse eco del discurso de los mandamases, disponiendo de los organismos públicos bajo su cargo como espolones de ataque a las universidades, negándoles cualquier requerimiento que ellas soliciten.

Es así que a las universidades se les niega sistemáticamente lo que pidan, empezando por el Tribunal Supremo que anula o impide elecciones en el ámbito universitario en las que sale o luce perdedor el partido de gobierno, seguido por la alcaldía que confisca terrenos propiedad de alguna universidad, hasta llegar al acueducto o empresa eléctrica que les niega atención a sus requerimientos para mejorar el servicio que les presta y por el que ellas pagan.

Todo ello para no hablar de la Asamblea Nacional, que con gran celo cumple las instrucciones delimitar financieramente a las universidades autónomas, asignándoles presupuestos notoriamente deficitarios. Como órgano legislativo está en mora en la promulgación de las tantas veces prometidas leyes de educación superior o de infraestructura universitaria.

Cada día menos estudiantes, de postgrado y pregrado, entran a las aulas de las facultades de ciencia o a las escuelas de medicinas o ingenierías o regresan a esas aulas como integrantes del cuerpo docente de una universidad. Los profesores que quedan andan prestos en busca de la jubilación y los que todavía no reúnen los requisitos necesarios andan buscando empleo más allá de nuestras fronteras. Basta

ver que Ecuador, un país que no era uno de los destinos turísticos preferidos de los venezolanos, se ha convertido en una opción para muchos de nuestros investigadores a través de su programa de captación de talento para su nueva ciudad del conocimiento. Hoy en día, la fuga de cerebros es una auténtica hemorragia de talento.

El resultado de la política gubernamental de doblegar a nuestras grandes universidades autónomas está a la vista. Salones de clases derruidos, edificios destrozados o sin finalizar; bibliotecas por los suelos con colecciones de revistas desactualizadas y sin conectividad a la red de redes para nutrir a estudiantes y profesores de nuevos conocimientos; laboratorios envejecidos y llenos de instrumentos y reactivos vencidos y vetustos; jardines despojados de ornamentos, campos deportivos desmantelados; comedores que dan hambre; profesores y estudiantes viviendo de remuneraciones miserables; cátedras sin recursos ni para comprar tiza; imprentas que no pueden lidear ni con un folleto; Facultades sin generación de relevo ni capacidad para enviar un joven a capacitarse o realizar estudios doctorales en campos de frontera del conocimiento y pare usted de contar.

Estos son algunos de los motivos que una vez más mueven al Núcleo de los Coordinadores de los Consejos de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) y equivalentes de las universidades nacionales para emitir otra alerta más a la nación desde su reunión semestral, esta vez en Caracas el 22 de mayo pasado y desde la sede de la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL). Con esta declaración ya se ha perdido la cuenta de las veces que las autoridades universitarias venezolanas han denunciado la crítica situación por la que atraviesan las universidades que dirigen.

Y es que desde el año 2008 se viene evidenciando una caída progresiva en la producción científica del país, medida como el número de publicaciones hechas en Venezuela y publicadas en revistas de prestigio nacional o internacional. El año pasado Venezuela produjo la mitad de las publicaciones que había registrado hace ocho años. Eso de por sí es pésimo pero resulta imperdonable ante el hecho que los países vecinos –incluyendo a Cuba– en el mismo periodo han duplicado su producción científica, montados en la ola de una renovada actividad científica mundial. En otras palabras, estamos produciendo al menos un cuarto de lo que podríamos estar haciendo y que aún es mucho menor de lo que deberíamos estar haciendo si tomamos en cuenta que el pasado ya distante –antes de la era Chávez– no estábamos haciendo en ciencia todo a las mil maravillas. Como país, en lo que a ciencia, tecnología e innovación se refiere, estamos perdiendo la oportunidad y andamos sin rumbo y al garete.

La pregunta obligada es ¿por qué eso? En teoría para hacer ciencia se necesita, en primer lugar, recursos humanos, en segundo lugar facilidades operacionales y, en tercer lugar, financiamiento. Venezuela cuenta con un número abundante de universidades regadas por toda su geografía y ellas son el locus donde nacen, crían y florecen los recursos humanos por excelencia para el trabajo creador. Esas universidades cuentan con profesores, estudiantes y administradores que mueven el proceso investigativo y la infraestructura, los servicios y los sistemas que permiten desarrollar el trabajo investigativo. Finalmente, en teoría Venezuela cuenta con una Ley de Ciencia y Tecnología que anualmente recoge entre el 2% y 3% del PIB únicamente para ser destinadas a labores de desarrollo, investigación e innovación. Siendo esto así, ¿cómo se explica qué no estemos haciendo ciencia?

El rosario de explicaciones fueron ya dadas. Ciencia es equivalente a trabajo universitario y Universidad es anatema para el presente gobierno. Un 80% de toda la ciencia hecha en Venezuela es producida en algún recinto universitario y de ese porcentaje, la casi totalidad es ejecutada en una de las grandes universidades autónomas del país; La Central, Simón Bolívar, Andes, Zulia, Carabobo, Libertador, Oriente, Lisandro Alvarado o Guayana, etc. Son ellas –las que representan lo mejor de nuestro sistema de educación superior– el blanco de la ira gubernamental.

El resto de nuestra ciencia se hace en centros de investigación dependientes del Estado y ahora bajo un férreo control político, liderizado por gigantografías de los ojos de Chávez e imágenes del Che Guevara y Fidel Castro. Allí, en el IVIC, IDEA y el INIA se hace el resto de la ciencia. Empero, allí donde impera la ideología revolucionaria y socialista del Siglo XXI tampoco las cosas andan bien. La producción científica también viene en picada, produciendo la mitad de lo que solían producir unos años atrás.

Este panorama poco alentador justifica con creces que las autoridades universitaria vuelvan a alertar a la nación sobre el desastre que enfrentan. Aunque no creemos que el gobierno le vaya a hacer algún caso, como conductores del proceso de formación de los profesionales que el país requiere esa es su obligación. Por ese gesto y el esfuerzo en tratar de mantener viva una llama que se extingue, va nuestro reconocimiento.

Nota

¹ En referencia a un personaje de la novela *Doña Bárbara* (1929) de Rómulo Gallegos (nota de los editores).